



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: BLANCA LIGIA VIANA DE AGUDELO
Demandado: PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 012 2019 00133 01
Sentencia: S-220

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de PORVENIR S.A., en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

BLANCA LIGIA VIANA DE AGUDELO demandó a PORVENIR S.A., para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo IVÁN DARÍO AGUDELO VIANA a partir del 24 de septiembre de 2016, junto con los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus pretensiones, que contrajo matrimonio con el señor GONZALO AGUDELO el 27 de abril de 1952; que de dicha unión nació su hijo IVÁN DARÍO AGUDELO VIANA el 24 de febrero de 1964; que su esposo falleció el 5 de septiembre de 1980 y su hijo el 24 de septiembre de 2016; que siempre vivió con IVÁN DARÍO, quien nunca tuvo hijos ni esposa o compañera permanente; que su hijo era el encargado de velar por su sostenimiento económico; que durante los 8 años previos a la muerte realizó compras para mercado que oscilaban entre \$500.000 y \$600.000 mensuales; que en los últimos 3 años de cotizaciones dejó acreditadas 107.14 semanas de cotización; que solicitó la pensión de sobrevivientes el 3 de diciembre de 2016; y que la entidad negó su solicitud mediante comunicaciones del 22 y del 28 de marzo de 2017.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PORVENIR S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda toda vez que no se logran acreditar los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la pensión reclamada. Desconoce la totalidad de hechos de la demanda, señalando que no está acreditada la dependencia económica que se alega en tanto el causante no estaba laborando para el momento en que se produjo la muerte, además, el núcleo familiar estaba compuesto por otros hijos que también contribuían a la economía de la familia. Como excepciones propuso falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Décimo Segundo Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a la AFP

PORVENIR S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora BLANCA LIGIA VIANA DE AGUDELO a partir del 24 de septiembre de 2016, ordenando como retroactivo pensional causado hasta la fecha de la sentencia, de \$54'812.911, junto con los intereses moratorios y las costas del proceso. ORDENÓ, además, que se continúe pagando una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación al considerar que la demandante no es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que se reclama, toda vez que no cumple con el requisito de la dependencia económica con respecto a su hijo fallecido. Se logró establecer que para la fecha del fallecimiento del afiliado este no se encontraba trabajando y su vinculación había terminado el 10 de junio de 2016, por lo que no se puede aducir que su señora madre dependía económicamente de quien para el momento de su fallecimiento no recibía ingresos económicos; además, la señora BLANCA cuenta con vivienda propia y para el momento del fallecimiento de su hijo recibía un subsidio económico por parte del Municipio de Medellín y vivía con otros de sus hijos, quien a la fecha le siguen ayudando con el sostenimiento del hogar y aun conviven en la comunidad de gastos.

Todo lo anterior llevó a concluir de una forma razonable y acertada que la demandante para el momento del fallecimiento de su hijo no dependía económicamente de este, si no que era el hijo quien dependía económicamente de su madre al encontrarse cesante, de manera que no se satisface el requisito del literal D del art. 13 de la ley 797 de 2003. De otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios o indexación en tanto no se encuentra en mora de reconocer obligación alguna al haber actuado de buena fe de acuerdo a la investigación administrativa realizada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada de PORVENIR S.A. se pronunció solicitando se revoque la sentencia de primera instancia insistiendo en el hecho de que la dependencia económica legalmente exigida no quedó demostrada en el curso del proceso. Contrario a ello, se logró acreditar, con la investigación administrativa realizada, que el causante no se encontraba trabajando para el momento de la muerte lo que no permite concluir que solventaba los gastos económicos requeridos por su madre. Agrega que la demandante tenía casa propia, recibía un subsidio del gobierno y además contaba con la ayuda de sus otros hijos, quienes también le aportaban para su congrua subsistencia. De confirmarse la sentencia en cuanto al reconocimiento de la prestación, solicita se revoque la condena por concepto de intereses moratorios al no encontrarse en mora en el reconocimiento y pago de obligación alguna.

CONSIDERACIONES:

Atendiendo al sustento dado al recurso de apelación presentado por la demandada PORVENIR S.A., el punto principal a dilucidar en esta instancia concierne a la pretensión de la demandante BLANCA LIGIA VIANA DE AGUDELO, relativa al pago de la pensión de sobrevivientes originada en la muerte de su hijo, IVÁN DARÍO AGUDELO VIANA ocurrida el 24 de septiembre de 2016, y en particular, en lo que toca con la dependencia económica de aquella con respecto a éste.

Y será ese requisito - el de la dependencia económica - el asunto central que deberá analizarse, ya que frente al hecho de la calidad de madre y el número de semanas de cotización que dejó acreditadas IVÁN DARÍO AGUDELO VIANA (107.14 en los 3 años anteriores a la fecha de la muerte), nada se discute a ésta altura del proceso, en tanto ambos han quedado plenamente acreditados.

Así las cosas, es de la incumbencia de la demandante, quien reclama para sí el derecho a la pensión de sobrevivientes, acreditar en el proceso que cuando su hijo falleció era este quien la sostenía económicamente, o, al menos, que le prestaba una contribución pecuniaria determinante para proporcionarle un sostenimiento digno y congruo, entendido como aquel que habilita al beneficiario para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

Lo anterior habida cuenta que, en el proceso judicial, corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio.

Se ha explicado insistentemente que la noción de la dependencia económica contiene un alcance relativo, en tanto debe analizarse en cada caso específico si la contribución del causante para con sus ascendientes, en caso de darse, era o no determinante para la conservación y sostenimiento de sus condiciones habituales de vida.

Al respecto, la jurisprudencia laboral ha interpretado la noción general de la dependencia económica, en cuanto que no se descarta que los padres pudieran recibir un ingreso adicional o tener su propio patrimonio, siempre que éstos no los convierta en autosuficientes económicamente. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, la parte demandante debe demostrar que recibía un aporte proporcionalmente significativo y determinante con respecto a los otros ingresos que percibe. Así lo ha explicado en múltiples providencias como, a título ilustrativo, la SL 14923 de 2014; o, entre las más recientes, la SL 2877 del 24 de julio de 2019, SL 650 del 19 de febrero de 2020 o más recientemente la SL 4300 del 25 de agosto de 2021, rad. 87641, en la que de manera amplia señaló:

“... se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; empero, no se puede entenderse que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL14539-2016, CSJ SL4103-2016 y CSJ SL16184-2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676, y que se recuerdan:

a) La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que **tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia..**"

(Negrilla fuera del original)

Con base en lo anterior, lo pertinente es examinar el material probatorio para determinar si la señora BLANCA LIGIA VIANA DE AGUDELO cumple o no con el presupuesto de la prueba en torno a la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, atendiendo a que, se reitera, la entidad accionada cimienta su posición en la falta de este requisito.

En este sentido, lo primero que cabe advertir es que la entidad negó la prestación solicitada según comunicaciones del 22 y del 27 de marzo de 2017. En la primera de esas respuestas sostuvo que "... al momento del fallecimiento del afiliado Usted no dependía económicamente del mismo, de acuerdo a la información y documentación allegada en esta reclamación...". En la segunda respuesta, lo que aduce la entidad demandada es que: "... su solicitud de pensión de sobrevivencia no cumple con los requisitos establecidos para su aprobación, teniendo en cuenta que el señor (a) IVÁN DARÍO AGUDELO VIANA no cotizó 50 semanas durante los 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento". Fls. 38 y 39.

Es sabido que la investigación pre judicial que realizan las entidades Administradoras tiene cabida dentro del proceso no como un documento de carácter vinculante o determinante, sino como un medio probatorio más del conjunto aportado al plenario, que ha de examinarse de consuno con los restantes medios de convicción, sin

que las declaraciones allí rendidas resulten vinculantes para el operador judicial.

No obstante, además de que no fue aportado al proceso, atendiendo a la totalidad de las pruebas recaudadas y de acuerdo al contexto en el que se desarrollaba la vida del causante y su grupo familiar, que se reducía para ese entonces a su madre y a una hermana, la realidad de la situación da cuenta de que lo aportado económicamente por IVÁN DARÍO sí era determinante para la conservación de las condiciones habituales de vida de su madre.

Con las declaraciones recibidas en audiencia pública virtual dentro del presente proceso, obviamente con la garantía del derecho de contradicción, que lo fueron los testimonios de LUZ HELENA MUÑOZ ÁNGEL y ANA DELIA ARANGO PAVA, han quedado acreditadas situaciones tales como las siguientes: **1)** el causante no tenía hijos, no era casado y no tenía relación con alguna persona con carácter de compañeros permanentes; **2)** para la fecha de la muerte el causante vivía únicamente con su madre y una hermana llamada BEATRIZ; **3)** la señora BLANCA LIGIA ha sido ama de casa, sin bienes distintos a su lugar de residencia y sin actividades que le generen ingresos económicos; **4)** su único ingreso proviene de ventas de comidas que ha venido realizado con su hija con posterioridad a la época del fallecimiento del causante; y **5)** no existen otras personas que le suministren algún tipo de ayuda o contribución para el cubrimiento de sus necesidades básicas, ya que su esposo falleció desde 1980 y sus otros hijos están casados y tienen sus propias obligaciones.

Se advierte, además, que se trata de testigos que merecen plena credibilidad en tanto sus declaraciones fueron espontáneas, coherentes y consecuentes según cada una de las preguntas que los apoderados de las partes iban realizando, siendo además coincidentes en la mayoría de los aspectos con respecto a lo que la propia demandante señaló en su interrogatorio de parte, de quien de todas

maneras se debe considerar que para ese entonces contaba con 88 años de edad.

En primer lugar, la testigo AMPARO DE JESÚS RÍOS OSPINA, quien dijo conocer a la demandante desde hace más de 50 años, advirtió que ella siempre ha sido ama de casa, que vive en casa propia con una hija que no tiene trabajo y se dedica al hogar con ella y que no tiene otras propiedades. Sobre la actividad del causante explicó: *“Él laboraba con encuestas, no sé para qué entidad, pero yo tenía conocimiento que hacía encuestas. Vivía con la mamá y una hermana (...) Él la sostenía, yo soy vecina de ellos, él la mantenía hasta que se murió”*. Dice además que IVÁN DARÍO le suministraba *“... el mercado, el dinero para los servicios, los gásticos de ella, servicios, comida, cositas, todos los gastos del hogar, todo lo que tiene que ver con los gastos del hogar”*.

Explica también que la demandante tiene más hijos pero que *“Todos ellos son casados, viven aparte y tienen sus obligaciones, todavía tiene 9 porque ya se le han muerto 3, los que están vivos tienen sus obligaciones y viven aparte, no viven con ella”*.

Respecto de la situación económica en el hogar luego del fallecimiento de IVÁN DARÍO, señaló que: *“Ellas desde que IVÁN faltó hacen cositas para comer como tamales, morcilla, así, cositas, buscando el sustento y nosotros los vecinos le colaboramos también, porque al faltar IVÁN quedaron con muy poquito dinero”*. Dice que el causante ganaba el mínimo o un poquitico más del mínimo; que antes del fallecimiento de IVÁN, *“... ellas no hacían esas actividades, porque IVÁN las mantenía, lo que están haciendo es ahora a raíz de la muerte de IVÁN”*; y que *“Yo veía cuando iba a hacer el mercado y le daba platica, yo veía que le daba platica pero no veía cuánto.”*

En segundo lugar, ANA DELIA ARANGO PAVA, vecina por más de 25 años, informó que IVÁN DARÍO era el único apoyo que la demandante

tenía, que la casa donde vive es propia, que cuando aquel falleció vivían ellos dos y una hermana llamada BEATRIZ y que *"Él era como encuestador, en una empresa de encuestas trabajaba, no sé exactamente en qué empresa"*. Dice también que tanto la mamá como su hermana se mantenían en la casa y que en términos económicos *"Él era el de todo ahí, lo poco que ganaba era para la casa (...) para mercado, servicios, los gastos de la casa, le daba a la mamá la platica para las cositas de ella."*

Sobre los otros hijos dice: *"Ellos son casados, cada uno vive en su hogar"*; y particularmente sobre la hermana BEATRIZ, quien vive con la demandante dice: *"... ella hace cositas para vender, tamales, empanadas, morcilla, cositas así que los mismos vecinos le colaboramos comprándole"*, actividades que realiza junto con la demandante, pero que antes de la muerte del señor IVÁN no lo hacían, sino que fue *"... después para el sostenimiento y ayudarse para el sostenimiento"*.

Finalmente, explica sobre la casa donde viven que *"Es propia, pero es como una herencia de todos los hijos"*; que el causante hacía el mercado en el granero del barrio, *"Varias veces nos encontrábamos allá"*; y que *"... los ingresos que él tenía eran como un poquito más del mínimo"*, lo que sabe porque siempre comentaban, no exactamente cuánto, pero sí le decían que se ganaba el mínimo y a veces un poquito más.

En esas condiciones, no existe duda en cuanto al derecho de la demandante al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se reclama, en tanto, haciendo el parangón con la exigencia que por jurisprudencia ha sido establecida para este tipo de situaciones, es posible concluir que se trataba de una ayuda *cierta y no presunta*; claramente *periódica y no ocasional*; y sin duda *significativa* respecto del total de ingresos de la beneficiaria, de manera que constituía un verdadero soporte económico y no una simple y superficial

colaboración a los gastos del hogar, como lo haría cualquier hijo de familia.

Para la Sala no es de recibo el argumento de PORVENIR S.A. en cuanto sostiene que como la demandante recibía un auxilio del Estado, eso la convertía en autosuficiente económicamente. Y no lo es, en primer lugar, porque fue una conclusión incluida en el informe de la investigación administrativa sin ningún respaldo documental; y segundo, porque según lo que allí se dijo se trataba de un valor, para esa época, de \$151.000 bimestral, es decir, \$75.500 mensuales, que no son representativos en comparación con los gastos de un hogar como el de la demandante.

De otro lado, tampoco se comparte el argumento relacionado con que otros hijos ayudaban económicamente a los gastos de la demandante. Nada de eso se logró acreditar en el proceso, ni siquiera respecto de BEATRIZ quien es y era la única que vivía con ellos para la época de la muerte. La única referencia que en tal sentido existe en el proceso es la afirmación de la propia demandante cuando en su interrogatorio de parte señaló: “... los otros hijos me iban untando la mano con \$10.000 mil o así...”, lo que sin duda tampoco puede ser considerado como determinante en términos de dependencia económica.

Con todo, para la Sala resulta irrazonable que se diga que era el causante, una persona de 52 años de edad, quien dependía de su madre para la fecha de la muerte, época en la que aquella contaba con cerca de 85 años, sin empleo, sin pensión, sin actividades económicas y con una ínfima ayuda de parte de sus otros hijos.

Si bien es cierto la historia laboral allegada al expediente da cuenta de que para la fecha de la muerte el causante no estaba cotizando, ya que su último aporte al sistema que aparece es de junio de 2016, poco más de 2 meses antes de la muerte, ese solo hecho, ante la informalidad que caracteriza el mercado laboral colombiano, no

implica necesariamente la ausencia de ingresos económicos, en tanto los propios testigos indicaron que hasta el momento de la muerte el causante estuvo laborando y aportando para los gastos del hogar, lo que hacía gracias a la labor de encuestador que desempeñaba y cuya última vinculación formal fue con la empresa IPSOS NAPOLEÓN FRANCO Y CIA S.A.S. entre el mes de mayo de 2015 y el mes de junio de 2016.

Consecuente con lo anterior, la señora BLANCA LIGIA VIANA DE AGUDELO reúne los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de madre del señor IVÁN DARÍO AGUDELO VIANA, motivo por el cual la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

Con relación a los intereses moratorios, ha sido criterio de este Tribunal, a tono con la tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tales intereses corresponden a una indemnización que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida, asunto en el cual nada tiene que ver si la entidad obró o no de buena fe, o si adelantó o no una investigación administrativa aún seria o justificativa como fundamento de la negativa.

Siendo ello así, resulta improcedente la solicitud de la entidad, resaltando la Sala que la decisión del *A quo* de conceder la pensión de sobrevivientes, se basó en la aplicación de lo estipulado en el artículo 74 de la ley 100 de 1993 modificado por la ley 797 de 2003, donde no se exige una dependencia absoluta de los padres con sus hijos, más no en una interpretación jurisprudencial, sin que tampoco exista justificación legal que le permita ser exonerada de tales intereses. Es decir, la decisión que en su momento adoptó la entidad fue en el entendimiento de la situación particular de la demandante y su núcleo familiar, así como en un equivocado conteo de las semanas de cotización acreditadas.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Segundo Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de noviembre de 2021.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c7869dd56fe2db4cb0f4c1b7db4e357cd3be2b1b3b0412ce5097ec7b4ad7e210**

Documento generado en 25/08/2022 10:16:41 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>